

C.A. de Santiago

Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.

Proveyendo los escritos folios 11 y 12: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el 5 de marzo de 2025 comparece el abogado don Rodrigo Fuenzalida Fuenzalida quien interpone acción constitucional de amparo en favor de don **Álvaro Sebastián Zúñiga Fuentes** en contra del **Segundo Juzgado de Garantía de Santiago**, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la resolución de 25 de febrero de 2025 en los autos RIT 4536-2024, RUC 2400789210-8, en virtud de la cual rechazó la petición de sobreseimiento definitivo.

Expone, en lo pertinente, que el 10 de julio de 2024 se formalizó la investigación en contra del amparado por su eventual autoría en tres delitos de robo con intimidación, oportunidad en la que se dispuso su prisión preventiva, que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha.

Refiere que, el 20 de diciembre de 2024, se cerró la investigación, sin embargo, el Ministerio Público no formuló acusación sino hasta el 28 de enero de 2025, excediendo el plazo de 10 días establecido en el artículo 247 del Código Procesal Penal, sin que el Ministerio Público otorgara alguna explicación o que el tribunal realizara alguna actividad al respecto.

Indica que, en audiencia de 25 de febrero de 2025, que estaba agendada para la preparación del juicio oral, la defensa solicitó la declaración de sobreseimiento definitivo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 247 y 250 letra d), ambos del Código Procesal Penal, por haberse interpuesto la acusación fuera de plazo, que fue rechazada por el tribunal, con el argumento de que no se había fijado el plazo máximo de 2 días que establece el inciso 5° del artículo 247 del aludido cuerpo normativo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TYJMXBTBNVSQ

Sostiene que dicho acto es arbitrario por dos motivos: (i) porque admite como oportuna una acusación interpuesta más de un mes después de cumplido el término legal para ello, sin mayor explicación y; (ii) porque mediante el rechazo al sobreseimiento definitivo solicitado se promueve que no existirá consecuencia para quien no presentó su acusación y para quien la proveyó sin reparar que estaban fuera de plazo.

Prevía referencia a la normativa que entiende pertinente, solicita tomar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, en particular, ordenando dejar sin efecto la resolución señalada, decretando el sobreseimiento definitivo de los antecedentes y la inmediata libertad del amparado.

Segundo: Que, el 27 de marzo de 2025, don César Orellana López, Juez del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, evacuó el informe solicitado, y expone que: (i) en los autos RIT 4636-2024, RUC 2400789210-8, el 20 de diciembre de 2024 el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación; (ii) el 28 de enero de 2025 el Ministerio Público presentó acusación; (iii) por resolución de 29 de enero de 2025 el tribunal tuvo por deducida la acusación, y citó a los intervinientes a audiencia de preparación de juicio oral para el 25 de febrero de 2025; (iv) en la audiencia referida, la defensa del imputado solicitó su sobreseimiento por la presentación extemporánea de la acusación fiscal.

Explica que dicha solicitud fue rechazada por el tribunal, por los siguientes argumentos: *“Que lo primero a establecer es que en la causa, el cierre de la investigación se verificó en conocimiento de todos los intervinientes, porque se comunicó en la audiencia de 20 de diciembre de 2024, momento desde el cual corrió el plazo para efectos de presentar en 10 días la acusación por parte del Ministerio Público.*



Posterior a eso hay un hecho, con relación al que no hay controversia, y que dice relación con que el tribunal conforme lo dispone el inciso quinto del artículo 247 del Código Procesal Penal, no habiéndose deducido acusación, no fijó el plazo máximo de dos días que establece la ley para que el Fiscal deduzca acusación, sin tampoco dar cuenta de esa circunstancia al Fiscal Regional, conforme a lo cual no operó la consecuencia procesal de proceder de oficio decretar el sobreseimiento definitivo de la causa.

Ahora, esta circunstancia por parte de la defensa no fue observada o impugnada, por lo que desde esa perspectiva se verificó necesariamente el saneamiento de la nulidad, al no impetrar la defensa la declaración de la misma en forma oportuna, habiendo transcurrido un tiempo amplio después del día 11 desde el día 20 de diciembre de 2024, manteniendo una conducta pasiva, inclusive hasta después de formulada la acusación, notificada la misma a la defensa, y habiendo sólo en la presente audiencia que es de preparación de juicio oral formulado la incidencia.

De esta perspectiva se ha verificado el saneamiento de la nulidad, sin que por otro lado se haya verificado un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad, ya que si bien se pudo verificar una inobservancia de una forma procesal, ésta no atentó en contra de las posibilidades de actuación del imputado a través de su defensa, ya que existió la posibilidad de que el tribunal hiciera efectivo lo que dispone el inciso quinto del artículo 247 del Código Procesal Penal, con ocasión de los emplazamientos realizados correctamente a la defensa vía cuenta de correo electrónico, y habiendo tomado conocimiento directo y personal en la audiencia del 20 de diciembre de 2024, de que se cerró la investigación. Y así, no se verifica infracción alguna que hubiere impedido el pleno ejercicio de las garantías, porque existió objetivamente esa posibilidad, por lo que se



rechaza la petición de la defensa de decretar el sobreseimiento definitivo de la causa según lo previsto en el artículo 250 letra e) del Código Procesal Penal’.

Tercero: Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República, consagra la denominada acción de amparo y dispone, en lo pertinente, que: “Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

De igual forma, el inciso tercero de dicho precepto señala que “El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de amparo, la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, esto es, que afecte la garantía fundamental de la libertad personal y seguridad individual, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes que obran en autos, queda claro que el tribunal recurrido rechazó el sobreseimiento definitivo, lo que se impugna mediante el presente arbitrio constitucional, en audiencia celebrada con la presencia de todos los intervinientes, previo debate y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TYJMXBTBNVSQ

consignando los fundamentos que lo llevaron a tomar dicha determinación, la que no fue apelada.

Sexto: Que, acorde lo que se viene razonando, la resolución impugnada por el recurrente ha sido dictada por un órgano competente, actuando dentro de la esfera de sus atribuciones y de conformidad con lo prescrito en el artículo 250 del Código Procesal Penal, que permite al juez de garantía, decretar el sobreseimiento definitivo.

Séptimo: Que, es dable señalar que el recurso de amparo es de carácter extraordinario y de naturaleza constitucional, en circunstancias que las alegaciones para fundamentar el mismo, sólo inciden en materias para las cuales el legislador contempló recursos ordinarios, los que -revisados los autos en cuestión- no fueron ejercitados. Entenderlo en sentido contrario, equivale a desnaturalizar el recurso de amparo, transformándolo en un verdadero recurso de apelación.

En efecto, esta acción persigue vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en lo concerniente a la privación o amenaza de atentados contra la libertad personal y la seguridad individual en el evento que aparezca de manifiesto y claramente apreciable que lo decidido por un tribunal no se correspondió al ordenamiento jurídico vigente, pero tal comprensión supone la excepcionalidad de su procedencia, sin embargo, aparece que en el presente caso se pretende atacar una resolución pronunciada por un tribunal en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo al procedimiento fijado en la ley, en contra de la cual no se ejercieron los mecanismos de impugnación ordinarios que contempla la legislación.

De esta forma, como se adelantó, no dándose en la especie los supuestos que hacen procedente la acción constitucional ejercida, toda vez que la actuación reprochada se ha enmarcado en el ámbito de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TYJMXBTBNSQ

jurisdicción y con estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República, el presente recurso debe ser desestimado.

Octavo: Que, no obstante lo resuelto, resulta menester hacer presente que, considerando lo prescrito en el inciso quinto del artículo 247 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público sobrepasó en exceso el plazo de 10 días que tenía para presentar su acusación, lo que importa una negligencia que contraría los principios inspiradores del proceso penal de concentración, celeridad y derecho a la defensa, máxime considerando que en estos autos el imputado se encuentra privado de libertad, consideraciones por las que se estima que dicha situación deberá ser puesta en conocimiento de la Fiscalía Regional, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema que rige la materia, **se rechaza**, sin costas, la acción constitucional de amparo deducida en favor de don Álvaro Sebastián Zúñiga Fuentes en contra del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

Sin perjuicio de lo anterior, **oficiése a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte**, a fin de que adopte las medidas administrativas que estime pertinentes respecto a los antecedentes de autos.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

NºAmparo-980-2025.

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Il. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la Ministra señora Inelie Durán Madina, conformada por la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TYJMXBTBVSQ



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TYJMXBTVSQ

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Inelie Duran M., Ministra Suplente Paula Rodriguez F. y Abogado Integrante Cristian Parada B. Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TYJMXBTVSQ